Suplemento de Página/12 Año 2 - Nº 114 - Domingo 20 de diciembre de 1992

DEBATE

INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

¿La industria argentina está en condiciones de efectuar una reconversión hacia tecnologías más limpias? ¿Hasta dónde llega su compromiso ecológico? ¿Está dispuesta a absorber los costos ambientales? ¿Cómo se equilibra la competencia entre empresas limpias y empresas sucias? ¿Cómo se ve desde la industria la política ambiental oficial? Las respuestas de algunas industrias, en este número del **Verde**, como parte de un debate que recién comienza.



INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

UNA RELA
DIFICIL

Cuatro representantes empresariales debatieron junto al Verde los límites y perspectivas de la actividad industrial en el marco de las crecientes demandas de protección del medio ambiente.

El agotamiento de los recursos naturales y los crecientes registros de contaminación tienen variados orígenes y niveles de responsabilidad. Sin embargo, existe un generalizado consenso internacional en asignarle al sector industrial una importante cuota de participación en los problemas ambientales que aquejan al mundo moderno. En la actualidad y a partir de las sospechas que suelen ubicarlos como los malos de la película, muchos industriales incorporaron departamentos ambientales y estrategias para morigerar el impacto de su actividad productiva sobre el medio ambiente, otros prefirieron modificar sólo su imagen pública mediante estrategias de marketing o "maquillajes verdes", y otros, sencillamente, obviaron el tema. En la Argentina la discusión recién comienza, pero a partir de la sanción de la ley de residuos peligrosos y la intervención judicial, las industrias ocuparon los primeros planos de la escena. Con idea de aportar algunos elementos a esa discusión y conocer la posición del sector industrial argentino respecto de los temas ambientales, el suplemento **Verde** organizó a mediados de noviembre una mesa redonda a la que fueron invitadas algunas de las empresas y cámaras representativas de distintos rubros productivos. Quienes se animaron o tuvieron oportunidad de participar —Aluar, CIBA, la Cámara de Fabricantes de Aerosoles y la Cámara Argentina de Sanidad Animal y Fertilizantes— arrimaron algunas respuestas entre las que figuró una crítica a la falta de una política ambiental nacional.

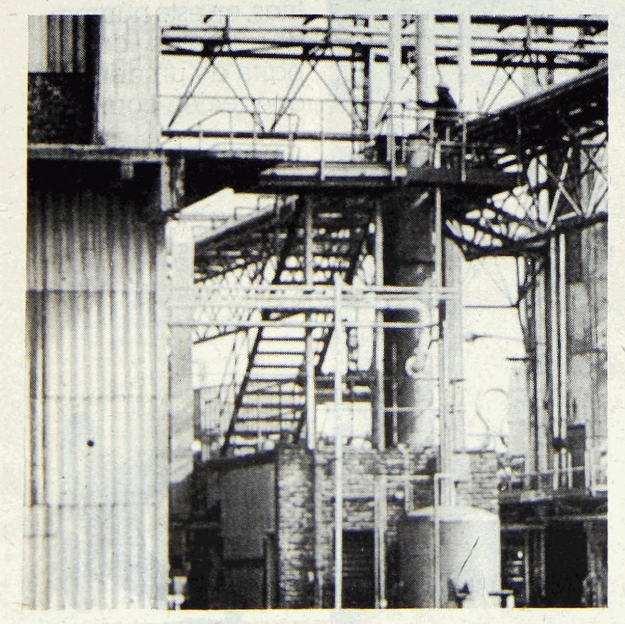
"En el caso nuestro —señaló Sulim Granovsky, representante de la cámara de aerosolistas— hablamos con varios legisladores que habían trabajado en anteproyectos de ley regidos por una visión unilateral del tema, porque estaban dirigidos al uso de CFC en aerosoles que de hecho no los usan. De modo que se planteaba una ley que prohibía el uso de CFC donde no se usan y hay un vacío legal en otros terrenos. En otros países, como Venezuela, por ejemplo, se cuenta desde hace años con una ley penal ambiental extremadamente dura. Creo que acá habrá que ir también a un código ambiental de esas características y no a los casos puntuales, legislados en forma insuficiente."

LEYES EN EL AIRE

El reclamo de una mayor rigidez en la legislación quizá se enfrente a la oposición de otros sectores industriales pero no parece ser un problema para los fabricantes de aerosoles: la industria local suprimió voluntariamente en el año 1988 el uso de los clorofluorocarbonos (CFC) —acusados de dañar la capa de ozono— en la producción de aerosoles.

"Desde el '75 —explica Granovsky—, cuando aparece por primera vez el modelo de Rauber y Molina, en el que se identifica a los CFC como causantes del agotamiento de la capa de ozono, la industria aerosolista en Estados Unidos comienza a abandonar su uso sin entrar en la discusión de si era o no una controversia científica resuelta. Para el '78 se prohíbe en ese país el empleo de CFC como propelente de aerosol. Esa actitud es seguida muy de cerca por los productores de nuestro país, por diversas razones, entre ellas, porque la mayor parte de las industrias radicadas aquí son filiales de matrices norteamericanas, fundamentalmente. Y al margen de ello porque hay una situación beneficiosa para el caso argentino con la producción de derivados de los hidrocarburos de donde se obtiene un gas butano que vale diez veces menos que los CFC. Es decir, hay una razón económica muy ventajosa. En el '87 se firma el Protocolo de Montreal y se termina la controversia científica; al año la cámara convoca a todos sus asociados y decide una restricción voluntaria. Esa restricción adoptada por consenso es suscripta inclusive por los fabricantes de los CFC, lo cual hace que dejen de presionar con el factor de venta. Y en el '91, finalmente, por un lobby hecho por la propia cámara —un lobby positivo, remarca Granovsky— se sanciona la ley 2440, en cuya redacción participamos, que viene a legitimar una decisión voluntaria, es decir, prohíbe el uso de CFC, salvo en los medicamentos para inhalantes."

"En general —relata Granovsky— en aquellas empresas donde hubo que hacer una reconversión industrial sucedieron dos cosas: algunas tenían plantas ya preparadas para la reconversión, y otras tuvieron que hacer inversiones importantes que nosotros estimamos en aproximadamente 1,5 millón de dólares, en la reconversión específica para el uso del butano. Otras firmas discontinuaron de su producción aquellos productos en los que no podían reemplazar los CFC, pese a que eran líneas de consumo y venta masiva."



"En el caso de las empresas productoras de agroquímicos —explica Néstor Alvarez, representante de CASAFE— todas son conscientes de que fabrican productos tóxicos, venenos, pero venenos útiles que, bien utilizados, no presentan riesgos. La mayoría son filiales de empresas multinacionales, por lo que están obligadas a cumplir severos requisitos ambientales e investigar nuevos productos que cumplan seis premisas: ser biológicamente activos; inocuos para el medio ambiente, es decir que no causen ningún trastorno ecológico; deben ser activos en bajas dosis —hasta hace poco se empleaban de dos a cuatro litros de agroquímicos por hectárea y hoy estamos hablando de cuatro a cinco gramos de principio activo por hectárea—; deben ser de espectro limitado, es decir no insecticidas que maten todo sino que generen sólo el efecto puntual buscado; que sean biodegradables rápidamente; y que dejen residuos ínfimos o nulos. Estas normas significan un alto costo de inversión. Hasta hace diez años llegar a un nuevo principio activo demandaba entre 20 y 30 millones de dólares, hoy estamos entre 80 y 100 millones de dólares."

—*¿Qué pasa con los productos que sólo se comercializan en la Argentina y no en los países de origen?*

—En algunos casos se trata de productos no autorizados en países del Norte, sencillamente, porque en esos países no poseen enfermedades o plagas que aquí sí existen. Hay que ver caso por caso.

—*¿Cuál es el caso, por ejemplo, del Aldicarp?*

—El Aldicarp se emplea en todos los países. Aquí está autorizado con ciertas restricciones. Para tener una idea, el consumo de Aldicarp en el estado norteamericano de Florida, es doce veces mayor que el uso total en la Argentina.

SALDOS Y RETAZOS

—*¿Hasta dónde llega la responsabilidad industrial frente a los problemas ambientales generados por sus productos?*

—Nosotros —responde Néstor Alvarez— no podemos hacernos cargo de un empleo incorrecto de los agroquímicos que es, generalmente, el que conduce a generar problemas. Aun así, elaboramos campañas de educación y concientización y actualmente estamos trabajando en un proyecto de recuperación de envases que plantea serias dificultades por la distribución territorial. En Europa, por ejemplo, ya se exige que cada envase posea un 30 por ciento de material reciclado de otros envases en desuso. Lo que ocurre es que el costo de ese proceso es altísimo frente a un valor de envase que es prácticamente nulo.

—*¿Las matemáticas financieras siempre conspiran contra la protección ambiental?*

—En general —responde Jernej Dobovsek, de CIBA— el costo ambiental debe ser asumido por las empresas como costo de producción en sí. En el año 1978, y debido a consideraciones ambientales, CIBA transfirió su actividad productiva hacia la localidad de Zárate. Hasta ese año se trabajaba en dos plantas instaladas en el corazón del Gran Buenos Aires. Desde el primer día de funcionamiento, la nueva planta contó con un sistema de tratamiento de efluentes que permitió devolver al Paraná las aguas empleadas en los procesos de producción tal como habían sido tomadas del río. El tema es que la legislación argentina no cubre en asuntos ambientales los límites o controles, como ocurre en otros países. Como CIBA es filial de una empresa de origen suizo, responde a las normas emanadas de su casa matriz que son muy severas, pero ello también genera inequidades. A nosotros la instalación de la planta de efluentes nos demandó una inversión del diez por ciento del total de la planta y en algún momento ese costo se traslada al producto. Pero resulta que uno está lidiando con la competencia. Si las otras firmas no están obligadas por el Estado, o motivadas a tener políticas de medio ambiente, ese costo no lo tienen, entonces estamos compitiendo en un margen de desigualdad. De allí que el tema de los controles, los estímulos y la concientización no son, en este terreno, un dato menor.

—*¿Cómo explican, entonces, la posición de la Unión Industrial Argentina que ha buscado sistemáticamente ablandar los términos de la nueva ley de residuos peligrosos?*

—Yo quiero objetar la idea de que los seminarios organizados por la UIA estuvieron destinados a ablandar la ley. Había, en todo caso, un interés genuino en aportar una información factual sobre el proyecto. En opinión de Carlos Ares, de ALUAR, "hay preocupación por que las leyes cumplan su objetivo, o sea, que se proteja al que trabaja bien y se persiga al que lo hace mal y no al revés. Hay casos históricos de leyes parciales o inoportunas y termina demorando el desarrollo de una verdadera política ambiental".

—*Sin embargo, algunas de las objeciones formuladas a la ley por la UIA modificaban el espíritu original del texto y otras, principalmente, buscaban incentivos.*

—En el caso de ALUAR, que es una compañía de capital nacional y que exporta el 75 por ciento de su producción, se tuvo una política ambiental desde el origen, principal-

INDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE

UNA RELACION DIFICIL

Cuatro representantes empresariales debatieron junto al Verde los límites y perspectivas de la actividad industrial en el marco de las crecientes demandas de protección del medio ambiente.



El agotamiento de los recursos naturales y los crecientes registros de contaminación tienen variados orígenes y niveles de responsabilidad. Sin embargo, existe un generalizado consenso internacional en asignarle al sector industrial una importante cuota de participación en los problemas ambientales que aquejan al mundo moderno. En la actualidad y a partir de las sospechas que suelen ubicarlos como los malos de la película, muchos industriales incorporaron departamentos ambientales y estrategias para morigerar el impacto de su actividad productiva sobre el medio ambiente, otros prefirieron modificar sólo su imagen pública mediante estrategias de marketing o "maquillajes verdes", y otros, sencillamente, obviaron el tema. En la Argentina la discusión recién comienza, pero a partir de la sanción de la ley de residuos peligrosos y la intervención judicial, las industrias ocuparon los primeros planos de la escena. Con idea de aportar algunos elementos a esa discusión y conocer la posición del sector industrial argentino respecto de los temas ambientales, el suplemento **Verde** organizó a mediados de noviembre una mesa redonda a la que fueron invitadas algunas de las empresas y cámaras representativas de distintos rubros productivos. Quienes se animaron o tuvieron oportunidad de participar —Aluar, CIBA, la Cámara de Fabricantes de Aerosoles y la Cámara Argentina de Sanidad Animal y Fertilizantes— arrimaron algunas respuestas entre las que figuró una crítica a la falta de una política ambiental nacional.

"En el caso nuestro —señaló Sulim Granovsky, representante de la cámara de aerosolistas— hablamos con varios legisladores que habían trabajado en anteproyectos de ley regidos por una visión unilateral del tema, porque estaban dirigidos al uso de CFC en aerosoles que de hecho no los usan. De modo que se planteaba una ley que prohibía el uso de CFC donde no se usan y hay un vacío legal en otros terrenos. En otros países, como Venezuela, por ejemplo, se cuenta desde hace años con una ley penal ambiental extremadamente dura. Creo que acá habrá que ir también a un código ambiental de esas características y no a los casos puntuales, legislados en forma insuficiente."

LEYES EN EL AIRE

El reclamo de una mayor rigidez en la legislación quizá se enfrente a la oposición de otros sectores industriales pero no parece ser un problema para los fabricantes de aerosoles: la industria local suprimió voluntariamente en el año 1988 el uso de los clorofluorocarbonos (CFC) —acusados de dañar la capa de ozono— en la producción de aerosoles.

"Desde el '75 —explica Granovsky—, cuando aparece por primera vez el modelo de Rauber y Molina, en el que se identifica a los CFC como causantes del agotamiento de la capa de ozono, la industria aerosolista en Estados Unidos comienza a abandonar su uso sin entrar en la discusión de si era o no una controversia científica resuelta. Para el '78 se prohíbe en ese país el empleo de CFC como propelente de aerosol. Esa actitud es seguida muy de cerca por los productores de nuestro país, por diversas razones, entre ellas, porque la mayor parte de las industrias radicadas aquí son filiales de matrices norteamericanas, fundamentalmente. Y al margen de ello porque hay una situación beneficiosa para el caso argentino con la producción de derivados de los hidrocarburos de donde se obtiene un gas butano que vale diez veces menos que los CFC. Es decir, hay una razón económica muy ventajosa. En el '87 se firma el Protocolo de Montreal y se termina la controversia científica; al año la cámara convoca a todos sus asociados y decide una restricción voluntaria. Esa restricción adoptada por consenso es suscripta inclusive por los fabricantes de los CFC, lo cual hace que dejen de presionar con el factor de venta. Y en el '91, finalmente, por un lobby hecho por la propia cámara —un lobby positivo, remarca Granovsky— se sanciona la ley 2440, en cuya redacción participamos, que viene a legitimar una decisión voluntaria, es decir, prohíbe el uso de CFC, salvo en los medicamentos para inhalantes."

"En general —relata Granovsky— en aquellas empresas donde hubo que hacer una reconversión industrial sucedieron dos cosas: algunas tenían plantas ya preparadas para la reconversión, y otras tuvieron que hacer inversiones importantes que nosotros estimamos en aproximadamente 1,5 millón de dólares, en la reconversión específica para el uso del butano. Otras firmas discontinuaron de su producción aquellos productos en los que no podían reemplazar los CFC, pese a que eran líneas de consumo y venta masiva."

"En el caso de las empresas productoras de agroquímicos —explica Néstor Alvarez, representante de CASAFE— todas son conscientes de que fabrican productos tóxicos, venenos, pero venenos útiles que, bien utilizados, no presentan riesgos. La mayoría son filiales de empresas multinacionales, por lo que están obligadas a cumplir severos requisitos ambientales e investigar nuevos productos que cumplan seis premisas: ser biológicamente activos; inocuos para el medio ambiente, es decir que no causen ningún trastorno ecológico; deben ser activos en bajas dosis —hasta hace poco se empleaban de dos a cuatro litros de agroquímicos por hectárea y hoy estamos hablando de cuatro a cinco gramos de principio activo por hectárea—; deben ser de espectro limitado, es decir no insecticidas que maten todo sino que generen sólo el efecto puntual buscado; que sean biodegradables rápidamente; y que dejen residuos ínfimos o nulos. Estas normas significan un alto costo de inversión. Hasta hace diez años llegar a un nuevo principio activo demandaba entre 20 y 30 millones de dólares, hoy estamos entre 80 y 100 millones de dólares."

—¿Qué pasa con los productos que sólo se comercializan en la Argentina y no en los países de origen?

—En algunos casos se trata de productos no autorizados en países del Norte, sencillamente, porque en esos países no poseen enfermedades o plagas que aquí sí existen. Hay que ver caso por caso.

—¿Cuál es el caso, por ejemplo, del Aldicarp?

—El Aldicarp se emplea en todos los países. Aquí está autorizado con ciertas restricciones. Para tener una idea, el consumo de Aldicarp en el estado norteamericano de Florida, es doce veces mayor que el uso total en la Argentina.

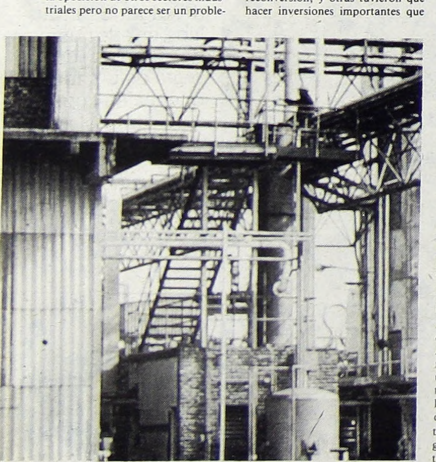
SALDOS Y RETAZOS

—¿Hasta dónde llega la responsabilidad industrial frente a los problemas ambientales generados por sus productos?

—Nosotros —responde Néstor Alvarez— no podemos hacernos cargo de un empleo incorrecto de los agroquímicos que es, generalmente, el que conduce a generar problemas. Aun así, elaboramos campañas de educación y concientización y actualmente estamos trabajando en un proyecto de recuperación de envases que plantea serias dificultades por la distribución territorial. En Europa, por ejemplo, ya se exige que cada envase posea un 30 por ciento de material reciclado de otros envases en desuso. Lo que ocurre es que el costo de ese proceso es altísimo frente a un valor de envase que es prácticamente nulo.

—¿Las matemáticas financieras siempre conspiran contra la protección ambiental?

—En general —responde Jernej Dobovsek, de CIBA— el costo ambiental debe ser asumido por las empresas como costo de producción en sí. En el año 1978, y debido a consideraciones ambientales, CIBA transfirió su actividad productiva hacia la localidad de Zárate. Hasta ese año se trabajaba en dos plantas instaladas en el corazón del Gran Buenos Aires. Desde el primer día de funcionamiento, la nueva planta contó con un sistema de tratamiento de efluentes que permitió devolver al Paraná las aguas empleadas en los procesos de producción tal como habían sido tomadas del río. El tema es que la legislación argentina no cubre en asuntos ambientales los límites o controles, como ocurre en otros países. Como CIBA es filial de una empresa de origen suizo, responde a las normas emanadas de su casa matriz que son muy severas, pero ello también genera inequidades. A nosotros la instalación de la planta de efluentes nos demandó una inversión del diez por ciento del total de la planta y en algún momento ese costo se traslada al producto. Pero resulta que uno está lidiando con la competencia. Si las otras firmas no están obligadas por el Estado, o motivadas a tener políticas de medio ambiente, ese costo no lo tienen, entonces estamos compitiendo en un margen de desigualdad. De allí que el tema de los controles, los estímulos y la concientización no son, en este terreno, un dato menor.



—¿Cómo explican, entonces, la posición de la Unión Industrial Argentina que ha buscado sistemáticamente ablandar los términos de la nueva ley de residuos peligrosos?

—Yo quiero objetar la idea de que los seminarios organizados por la UIA estuvieron destinados a ablandar la ley. Había, en todo caso, un interés genuino en aportar una información factual sobre el proyecto. En opinión de Carlos Ares, de ALUAR, "hay preocupación por que las leyes cumplan su objetivo, o sea, que se proteja al que trabaja bien y se persiga al que lo hace mal y no al revés. Hay casos históricos de leyes parciales o inoportunas y termina demorando el desarrollo de una verdadera política ambiental".

—Sin embargo, algunas de las objeciones formuladas a la ley por la UIA modificaban el espíritu original del texto y otras, principalmente, buscaban incentivos.

—En el caso de ALUAR, que es una compañía de capital nacional y que exporta el 75 por ciento de su producción, se tuvo una política ambiental desde el origen, principalmente por dos motivos: en el mercado internacional se está haciendo crecientemente visible la intención de caracterizar a las empresas a partir de su gestión ambiental; es decir, empresas sucias o empresas limpias y sus productos pueden verse discriminados. Este es un motor poderoso para tratar de parecernos en imagen a las empresas que mejor trabajan. Pero en realidad, el incentivo más poderoso es que trabajar limpio en general es sinónimo de trabajar bien, ordenadamente, con menos problemas de mantenimiento, menos derroche de energía o de materias primas, y eso va directamente a la fórmula de costos de una empresa. Eso ayudó mucho a que los cuadros de la compañía hayan visto este tema como parte del negocio mismo. Actualmente ALUAR tiene una política ambiental que abarca todos los niveles de trabajo. Un gerente, por ejemplo, conoce los registros de emisiones de cada instalación, cuáles son los límites permitidos internacional y localmente y cuál es el criterio interno de la empresa más allá de la legislación.

—¿Esto es trasladable a otras empresas de menor envergadura?

—En el caso de las industrias que están operando en la Patagonia —donde se encuentra la planta de ALUAR— con regímenes de promoción industrial más recientes, la coyuntura económica no es muy buena y su estructura de costos no las favorece. En este momento es muy difícil hablar con ellos de mejoras en las instalaciones proque se están planteando si van a seguir o no. Yo creo que si una empresa no es sana, no anda bien, no genera un producto que tiene un mercado claro, con una calidad aceptable, es muy difícil que haga buena seguridad ambiental. El deterioro se ve por todas partes.

—¿Esto no implica, por ejemplo en el caso de efluentes o residuos, transferirle el problema al resto de la sociedad?

—Las empresas son responsables de los residuos hasta la tumba, incluso son responsables del grado de contaminación que se puede detectar en un sitio que se usó hace 35 años y en ese caso lo debe pagar la empresa. De allí que en Estados Unidos uno de los temas actuales en discusión es cómo abandonar una planta y dejar todo en orden.

—¿Y qué pasa en la Argentina?

—En la Argentina el panorama no es muy claro. Nosotros en ALUAR, estamos almacenando y tratando nuestros residuos sólidos dentro de la planta y eso es un costo creciente porque cada vez hay más y cada vez el sistema de recuperación es más sofisticado. Vamos a tener que ir acompañando el grado de adelantos que se generan en el resto del mundo. En este momento, una empresa argentina que pueda operar con estándares parecidos a los de Holanda o Suecia, se considera una buena empresa, pero lo que ocurre es que allá están discutiendo que la legislación ya es obsoleta, de modo que el escenario que vamos a tener dentro de diez años va a ser más severo que el de ahora y va a haber que acompañarlo.

—En el caso de CIBA, también tenemos un tratamiento de residuos en la propia planta. Es un horno incinerador de alta temperatura, las cenizas resultantes se lavan, el agua va a la planta de efluentes y las cenizas finales se depositan en un recinto especial dentro del predio, pero sin ningún peligro de contaminación. Lo que hay que remarcar en este tema es que en el país no hay aún un lugar que esté preparado para recibir residuos sólidos, resultantes de procesos químicos o industriales, por lo cual uno adopta su propio método.

—Recordemos también —acota Alvarez— los escenarios, porque cuando uno ve la superficie de Europa, los habitantes que tiene, y los años que lleva actuando contra el medio ambiente y los compara con nuestro país se da cuenta de que no estamos tan mal.

—¿Eso justifica la conducta industrial?

—No pretendo justificar nada. Esto no quiere decir que el río Reconquista o el Luján no sean una cosa horrible. Estamos mal, pero no tanto. Nosotros tenemos un promedio de uso de fertilizantes de 4 kilos por hectárea. Holanda está en los 700 y Francia en 400 kilos por hectárea. Aquí solamente el 30 por ciento de los cultivos reciben agroquímicos.

—¿Para ustedes representan un mercado potencial?

—En cuanto persistan los subsidios agrícolas, nosotros no tenemos muchas posibilidades de crecer ni de que se aproveche ese mercado.

TODO TIENE PRECIO

—Una de las teorías muy en boga entre los industriales del Norte es la de proponer un método de incentivos financieros para políticas de protección ambiental, que consiste en establecer cuotas de bonificación por contaminación que puedan ser, incluso, negociables.

—Eso tiene una limitación —explica Ares— es sólo aplicable al dióxido de azufre y es una práctica experimental. Yo no creo que haya ningún elemento que demuestre que en el futuro cercano este tipo de políticas contribuya al desarrollo de sistemas de control de emisión.

—Existen modelos de asistencia financiera como el caso del Fondo Multilateral e Interino del Ozono que asistirá a aquellas industrias que se plantean el reciclado o recuperación de los CFC. Ese podría ser un modelo que se repitiera a nivel nacional pero lo cierto es —relata Granovsky— que una de las sorpresas de la reciente reunión realizada en Caracas es que el organismo internacional no entendía cómo la Argentina no estaba interesada en ninguno de esos créditos. De hecho el representante oficial ni siquiera concurrió.

—Eso prueba que hay mucha desinformación y que hace falta una campaña de concientización como funciona en varios países del Norte. En ello también hay una responsabilidad del Estado para llegar a todos los niveles.

—Pero del otro lado de la moneda están las estrategias de marketing de las empresas que alientan el consumo irracional.

—Yo creo que hay un problema de desarrollo y subdesarrollo. El último informe del Banco Mundial declara que —pese a que las emisiones mayores se producen en el Norte— los problemas ambientales más graves se están produciendo en el Sur.

—¿Están de acuerdo con la política ambiental de la Argentina?

—Acá no hay un proyecto ambientalista. No hay política. Pero empezó a girar la rueda. De abajo hacia arriba. Lo que hay que tener en cuenta es que hasta hace poco sólo se hablaba del dólar. Ahora hay más espacio para discutir otros problemas.

—No se puede proteger el ambiente en un clima de inseguridad económica, porque hay que sobrevivir.

—Que no escuche María Julia, pero ¿de qué política estamos hablando?



MUNICIPIOS NO NUCLEARES

NI POR TIERRA NI POR MAR

Por Elio Brat, desde Viedma

Unos veinte municipios, en representación de más de 60 que hoy existen en el país, llevaron adelante este último fin de semana en Viedma y Carmen de Patagones el Segundo Encuentro Nacional de Municipios No Nucleares y Zonas Ecológicamente Sustentables. En un manifiesto, que también fue firmado por organizaciones ecologistas como Greenpeace, Tierralerta (nacional y filial Río Negro), el Centro de Enlace del Medio Ambiente de Naciones Unidas y la Red Nacional de Acción Ecológica, con sus ochenta organizaciones ambientalistas, se definió "el más profundo repudio a quienes irresponsablemente cargan y fletan navíos como el 'Akatsuky Maru', que transportando plutonio de un continente a otro pone en riesgo letal a los habitantes de todo el planeta y los ecosistemas costeros y marinos". Los antinucleares mantienen su oposición a la construcción del basurero nuclear de Gastre en Chubut, al expresar que "no permitiremos que se condicione nuestro futuro ni el de las próximas generaciones. La Patagonia y la Antártida deben continuar siendo zonas limpias de industrias y basureros tóxicos y nucleares". El próximo encuentro se realizará en la localidad cordobesa de Villa María, durante el primer semestre del año '93.

Participaron del encuentro junto a los anfitriones Viedma y Carmen de Patagones, los municipios de La Plata, Bahía Blanca, Pilar (Buenos Aires), Rosario, Santa Fe, los pampeanos de Santa Rosa y General Pico, San Martín de los Andes de Neuquén, Villa María y San Carlos Minas de Córdoba y los rionegrinos de Sierra Grande, El Bolsón, Río Colorado, Choele Choel y San Carlos de Bariloche. También participaron y mandaron su adhesión el Movimiento Antinuclear del Chubut, Uñopatún, Fundación Nuestro Ambiente, Amiga Tierra y la Asociación Amigos del Arbol y la Tierra de Patagones, entre otros.

El encuentro, en un apoyo que consideran "fundamental" a las zonas no nucleares, tomó conocimiento de la decisión del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) de otorgar al intendente del municipio No Nuclear de Sierra Grande, Norberto Palferro, el premio denominado Memorial de la Paz, por la defensa de su comunidad, el medio ambiente y la vida. La distinción, que se otorga anualmente el 10 de diciembre en conmemoración de la fecha en la que se concediera el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, fue comunicada al plano del encuentro por Juan Schroeder a solicitud del mismo SERPAJ.

Además de su oposición al paso del barco japonés cargado con cientos de toneladas de plutonio "Akatsuky Maru" y de la construcción del basurero nuclear en Gastre, los reunidos consideraron que "es necesario denunciar e impedir que se continúe avanzando en la futura explotación de uranio en la zona del Nono, provincia de Córdoba y Los Adobes de Chubut. "No puede ni debe repetirse la nefasta experiencia de Malargue en Mendoza, donde son aún visibles las terribles consecuencias de estas explotaciones uraníferas", concluyeron los antinucleares argentinos.

MORATORIA NUCLEAR EN EE.UU.

UN PARTO PARA BUSH

Por A. F.

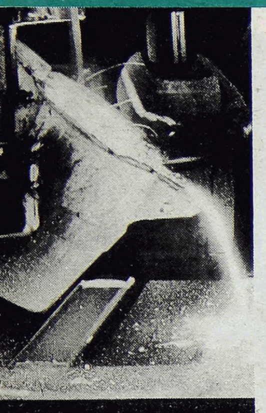
En una jugada no muy limpia pero rápida, el Congreso norteamericano obligó recientemente al presidente George Bush a firmar un proyecto de ley que establece una moratoria sobre pruebas nucleares en su territorio por nueve meses.

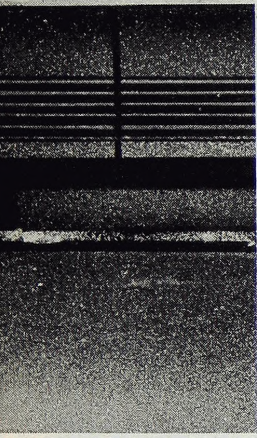
La estrategia de los parlamentarios fue agregar la prohibición a un paquete que incluía el financiamiento a proyectos energéticos y de agua muy importantes para la Administración. Aunque Bush ya ha alertado que tratará de dar vuelta la decisión por todos sus medios, algunos observadores creen que esta moratoria podría ser el primer paso antes de una prohibición permanente a experimentos nucleares, con comienzo en 1996.

De acuerdo con la revista *Nature*, el trasfondo de la cuestión toca el Tratado de No Proliferación Nuclear, que en 1995 recibirá el veredicto final de los países signatarios. Criticado por sus inspecciones internacionales y por sus atribuciones para meter las narices en la investigación nuclear de cada país, el Tratado de Tlatelolco está sumando nuevas firmas, como las de Sudáfrica y próximamente la de la Argentina. Sin embargo, ni China ni Francia ni India han adherido formalmente a él.

Algunos creen que el tratado está hecho para controlar a los pequeños, mientras los grandes establecen acuerdos bilaterales, como los firmados por EE.UU. y Rusia, que les permiten continuar fabricando sofisticadas armas nucleares. Firmar el tratado no es siempre respetar su letra.

La proliferación de armas nucleares ha continuado a pesar de los tratados. Sin embargo, muchos opinan que la situación sería peor sin ellos. La creciente moratoria norteamericana sería una manera de apoyar la sobrevivencia del Tratado de Tlatelolco, más allá de la crucial reunión de 1995. Otros, con modales menos educados, ya están proponiendo expulsar de las Naciones Unidas a quienes se resistan a firmarlo.





ACION

mente por dos motivos: en el mercado internacional se está haciendo crecientemente visible la intención de caracterizar a las empresas a partir de su gestión ambiental; es decir, empresas sucias o empresas limpias y sus productos pueden verse discriminados. Este es un motor poderoso para tratar de parecernos en imagen a las empresas que mejor trabajan. Pero en realidad, el incentivo más poderoso es que trabajar limpio en general es sinónimo de trabajar bien, ordenadamente, con menos problemas de mantenimiento, menos derroche de energía o de materias primas, y eso va directamente a la fórmula de costos de una empresa. Eso ayudó mucho a que los cuadros de la compañía hayan visto este tema como parte del negocio mismo. Actualmente ALUAR tiene una política ambiental que abarca todos los niveles de trabajo. Un gerente, por ejemplo, conoce los registros de emisiones de cada instalación, cuáles son los límites permitidos internacional y localmente y cuál es el criterio interno de la empresa más allá de la legislación.

—¿Esto es trasladable a otras empresas de menor envergadura?

—En el caso de las industrias que están operando en la Patagonia —donde se encuentra la planta de ALUAR— con regímenes de promoción industrial más recientes, la coyuntura económica no es muy buena y su estructura de costos no las favorece. En este momento es muy difícil hablar con ellos de mejoras en las instalaciones proque se están planteando si van a seguir o no. Yo creo que si una empresa no es sana, no anda bien, no genera un producto que tiene un mercado claro, con una calidad aceptable, es muy difícil que haga buena seguridad ambiental. El deterioro se ve por todas partes.

—¿Esto no implica, por ejemplo en el caso de efluentes o residuos, transferirle el problema al resto de la sociedad?

—Las empresas son responsables de los residuos hasta la tumba, incluso son responsables del grado de contaminación que se puede detectar en un sitio que se usó hace 35 años y en ese caso lo debe pagar la empresa. De allí que en Estados Unidos uno de los temas actuales en discusión es cómo abandonar una planta y dejar todo en orden.

—¿Y qué pasa en la Argentina?

—En la Argentina el panorama no es muy claro. Nosotros en ALUAR, estamos almacenando y tratando nuestros residuos sólidos dentro de la planta y eso es un costo creciente porque cada vez hay más y cada vez el sistema de recuperación es más sofisticado. Vamos a tener que ir acompañando el grado de adelantos que se generan en el resto del mundo. En este momento, una empresa argentina que pueda operar con estándares parecidos a los de Holanda o Suecia, se considera una buena empresa, pero lo que ocurre es que allá están discutiendo que la legislación ya es obsoleta, de modo que el escenario que vamos a tener dentro de diez años va a ser más severo que el de ahora y va a haber que acompañarlo.

—En el caso de CIBA, también tenemos un tratamiento de residuos en la propia planta. Es un horno incinerador de alta temperatura, las cenizas resultantes se lavan, el agua va a la planta de efluentes y las cenizas finales se depositan en un recinto especial dentro del predio, pero sin ningún peligro de contaminación. Lo que hay que remarcar en este tema es que en el país no hay aún un lugar que esté preparado para recibir residuos sólidos, resultantes de procesos químicos o industriales, por lo cual uno adopta su propio método.

—Recordemos también —acota Alvarez— los escenarios, porque cuando uno ve la superficie de Europa, los habitantes que tiene, y los años que lleva actuando contra el medio ambiente y los compara con nuestro país se da cuenta de que no estamos tan mal.

—¿Eso justifica la conducta industrial?

—No pretendo justificar nada. Esto no quiere decir que el río Reconquista o el Luján no sean una cosa horrible. Estamos mal, pero no tanto. Nosotros tenemos un promedio de uso de fertilizantes de 4 kilos por hectárea. Holanda está en los 700 y Francia en 400 kilos por hectárea. Aquí solamente el 30 por ciento de los cultivos reciben agroquímicos.

—¿Para ustedes representan un mercado potencial?

—En cuanto persistan los subsidios agrícolas, nosotros no tenemos muchas posibilidades de crecer ni de que se aproveche ese mercado.

TODO TIENE PRECIO

—Una de las teorías muy en boga entre los industriales del Norte es la de proponer un método de incentivos financieros para políticas de protección ambiental, que consiste en establecer cuotas de bonificación por contaminación que puedan ser, incluso, negociables.

—Eso tiene una limitación —explica Ares— es sólo aplicable al dióxido de azufre y es una práctica experimental. Yo no creo que haya ningún elemento que demuestre que en el futuro cercano este tipo de políticas contribuya al desarrollo de sistemas de control de emisión.

—Existen modelos de asistencia financiera como el caso del Fondo Multilateral e Interino del Ozono que asistirá a aquellas industrias que se plantean el reciclado o recuperación de los CFC. Ese podría ser un modelo que se repitiera a nivel nacional pero lo cierto es —relata Granovsky— que una de las sorpresas de la reciente reunión realizada en Caracas es que el organismo internacional no entendía cómo la Argentina no estaba interesada en ninguno de esos créditos. De hecho el representante oficial ni siquiera concurrió.

—Eso prueba que hay mucha desinformación y que hace falta una campaña de concientización como funciona en varios países del Norte. En ello también hay una responsabilidad del Estado para llegar a todos los niveles.

—Pero del otro lado de la moneda están las estrategias de marketing de las empresas que alientan el consumo irracional.

—Yo creo que hay un problema de desarrollo y subdesarrollo. El último informe del Banco Mundial declara que —pese a que las emisiones mayores se producen en el Norte— los problemas ambientales más graves se están produciendo en el Sur.

—¿Están de acuerdo con la política ambiental de la Argentina?

—Acá no hay un proyecto ambientalista. No hay política. Pero empezó a girar la rueda. De abajo hacia arriba. Lo que hay que tener en cuenta es que hasta hace poco sólo se hablaba del dólar. Ahora hay más espacio para discutir otros problemas.

—No se puede proteger el ambiente en un clima de inseguridad económica, porque hay que sobrevivir.

—Que no escuche María Julia, pero ¿de qué política estamos hablando?



MUNICIPIOS NO NUCLEARES

NI POR TIERRA NI POR MAR

Por Elio Brat, desde Viedma

Unos veinte municipios, en representación de más de 60 que hoy existen en el país, llevaron adelante este último fin de semana en Viedma y Carmen de Patagones el Segundo Encuentro Nacional de Municipios No Nucleares y Zonas Ecológicamente Sustentables. En un manifiesto, que también fue firmado por organizaciones ecologistas como Greenpeace, Tierralerta (nacional y filial Río Negro), el Centro de Enlace del Medio Ambiente de Naciones Unidas y la Red Nacional de Acción Ecológica, con sus ochenta organizaciones ambientalistas, se definió "el más profundo repudio a quienes irresponsablemente cargan y fletan navíos como el 'Akatsuky Maru', que transportando plutonio de un continente a otro pone en riesgo letal a los habitantes de todo el planeta y los ecosistemas costeros y marinos". Los antinucleares mantienen su oposición a la construcción del basurero nuclear de Gastre en Chubut, al expresar que "no permitiremos que se condicione nuestro futuro ni el de las próximas generaciones. La Patagonia y la Antártida deben continuar siendo zonas limpias de industrias y basureros tóxicos y nucleares". El próximo encuentro se realizará en la localidad cordobesa de Villa María, durante el primer semestre del año '93.

Participaron del encuentro junto a los anfitriones Viedma y Carmen de Patagones, los municipios de La Plata, Bahía Blanca, Pilar (Buenos Aires), Rosario, Santa Fe, los pampeanos de Santa Rosa y General Pico, San Martín de los Andes de Neuquén, Villa María y San Carlos Minas de Córdoba y los rionegrinos de Sierra Grande, El Bolsón, Río Colorado, Choele Choel y San Carlos de Bariloche. También participaron y mandaron su adhesión el Movimiento Antinuclear del Chubut, Uñopatún, Fundación Nuestro Ambiente, Amiga Tierra y la Asociación Amigos del Arbol y la Tierra de Patagones, entre otros.

El encuentro, en un apoyo que consideran "fundamental" a las zonas no nucleares, tomó conocimiento de la decisión del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) de otorgar al intendente del municipio No Nuclear de Sierra Grande, Norberto Palferro, el premio denominado Memorial de la Paz, por la defensa de su comunidad, el medio ambiente y la vida. La distinción, que se otorga anualmente el 10 de diciembre en conmemoración de la fecha en la que se concediera el Premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel, fue comunicada al plano del encuentro por Juan Schroeder a solicitud del mismo SERPAJ.

Además de su oposición al paso del barco japonés cargado con cientos de toneladas de plutonio "Akatsuky Maru" y de la construcción del basurero nuclear en Gastre, los reunidos consideraron que "es necesario denunciar e impedir que se continúe avanzando en la futura explotación de uranio en la zona del Nono, provincia de Córdoba y Los Adobes de Chubut. "No puede ni debe repetirse la nefasta experiencia de Malargue en Mendoza, donde son aún visibles las terribles consecuencias de estas explotaciones uraníferas", concluyeron los antinucleares argentinos.

MORATORIA NUCLEAR EN EE.UU.

UN PARTO PARA BUSH

Por A. F.

En una jugada no muy limpia pero rápida, el Congreso norteamericano obligó recientemente al presidente George Bush a firmar un proyecto de ley que establece una moratoria sobre pruebas nucleares en su territorio por nueve meses.

La estrategia de los parlamentarios fue agregar la prohibición a un paquete que incluía el financiamiento a proyectos energéticos y de agua muy importantes para la Administración. Aunque Bush ya ha alertado que tratará de dar vuelta la decisión por todos sus medios, algunos observadores creen que esta moratoria podría ser el primer paso antes de una prohibición permanente a experimentos nucleares, con comienzo en 1996.

De acuerdo con la revista *Nature*, el trasfondo de la cuestión toca el Tratado de No Proliferación Nuclear, que en 1995 recibirá el veredicto final de los países signatarios. Criticado por sus inspecciones internacionales y por sus atribuciones para meter las narices en la investigación nuclear de cada país, el Tratado de Tlatelolco está sumando nuevas firmas, como las de Sudáfrica y próximamente la de la Argentina. Sin embargo, ni China ni Francia ni India han adherido formalmente a él.

Algunos creen que el tratado está hecho para controlar a los pequeños, mientras los grandes establecen acuerdos bilaterales, como los firmados por EE.UU. y Rusia, que les permiten continuar fabricando sofisticadas armas nucleares. Firmar el tratado no es siempre respetar su letra.

La proliferación de armas nucleares ha continuado a pesar de los tratados. Sin embargo, muchos opinan que la situación sería peor sin ellos. La creciente moratoria norteamericana sería una manera de apoyar la sobrevivencia del Tratado de Tlatelolco, más allá de la crucial reunión de 1995. Otros, con modales menos educados, ya están proponiendo expulsar de las Naciones Unidas a quienes se resistan a firmarlo.

ECOVISION '92

UNA MIRADA DEL MUNDO

La primera muestra de cine sobre medio ambiente realizada en Mar del Plata permitió recorrer y reconocer la situación ambiental a través de la magia del cine.

No hay más imagen que un cielo apenas alterado por la cadencia con que suelen moverse las copas de los árboles. La motosierra no alcanza a verse pero se siente allí abajo y en cada butaca. El estruendo de ese inmenso árbol al caer marca el inicio del largometraje francés *Y se hizo la luz* con el que se abrió la Muestra Internacional de Cine sobre Medio Ambiente Eco Visión '92 realizada en Mar del Plata en los primeros días de diciembre.

La idea de esta primera edición de la muestra, organizada por la Secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de General Pueyrredón y la Fundación Cinearte de Mar del Plata, con el auspicio de la Secretaría de Medio Ambiente nacional, el suplemento **Verde** de **Página/12** y varias empresas, entre las que se contaron Cuore, ESEBA, Hotel Dos Reyes, Café Cabrales, CCTV, Fundación Mapfre, Banco Francés y Gráfica Martina Berrone, fue constituir un espacio para la difusión de los problemas ambientales nacionales e internacionales por vía de la magia del cine. Desde cortos publicitarios, breves documentales sobre situaciones de riesgo o proyectos ambientales en marcha, hasta películas de medio metraje, los treinta títulos expuestos en dos salas marplatenses durante cuatro jornadas cumplieron el doble objetivo de generar ese espacio de difusión y reunir, por primera vez en el país, a quienes en distintos rincones y desde diversas ópticas trabajan detrás de una cámara registrando imágenes de una realidad no siempre alentadora.

En un balance parcial quizá pueda objetarse la disparidad del material fílmico expuesto, pero como conjunto, este primer encuentro dejó, sin dudas, huellas para la reflexión. Trabajos como *Amerindia*, un documental brasileño de 45 minutos, ganador del Primer Premio en el festival Ecocine de San Sebastián, con una crítica visión sobre el llamado ''descubrimiento de América'' basada en imágenes inéditas de culturas indígenas de varias regiones latinoamericanas. O como *Tala total*, un documental alemán con una buena dosis de ficción, en el que se describe —con el apoyo de imágenes modificadas con ordenador— la situación de los bosques de la Selva Negra en el año 2010. O *Marea de guerra*, de origen inglés, en el que se reflejan los efectos de uno de los desastres ambientales modernos: los derrames de petróleo generados tras la guerra del Golfo. De la producción nacional, las atractivas imágenes de *Tombo*, un documental de Ricardo Sanguinetti sobre la fauna marina patagónica, o de *Agüita*, de Malvi Bussone, con la descripción de un trabajo de recuperación de la reserva hídrica Parque La Quebrada, se inscriben, junto a otros, entre los logros.

Con cada caída del sol la Eco Visión '92 iniciaba la proyección nocturna de videos en pantallas gigantes ubicadas en la peatonal San Martín. En este caso los caminantes detuvieron la marcha con la fuerza de Rata Blanca y su ''Guerrero del Arco Iris'', un excelente videoclip del grupo de rock dedicado a las actividades de Greenpeace, y tuvieron entonces la oportunidad de recibir los mensajes ecológicos diseñados como spots para televisión por la Fundación Ecológica para la Vida Natural, con imágenes y breves guiones tan atractivos como efectistas. Hubo, también en Mar del Plata, espacio para el debate. El Foro de Ecología y Medio Ambiente que acompañó la muestra abrió cada jornada con una mesa redonda sobre ''Los medios de comunicación y difusión y educación ambiental'', ''Recursos naturales y sustentabilidad ambiental'' y ''Planificación y gestión ambiental'', en las que participaron, entre otros, el periodista Mario Grasso; el subsecretario de Recursos Naturales, Humberto Rucchelli; Miguel Pellerano, de Vida Silvestre; Juan Schroeder, de Greenpeace; Sergio Mazzucheli, del IIED; Susana Alvarez, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales; Roberto Fernández, secretario de Desarrollo Urbano de la comuna local, y Eduardo Yazigi, director del Ecocine de San Sebastián, Brasil. Para el cierre, se reservó lo que quizá sea el mejor largometraje visto hasta ahora sobre este tema: Powakarsi, una profecía ecológica.

La idea es que Eco Visión reedite cada año el espacio abierto en estas cuatro jornadas. Por lo pronto, el encuentro logró conformar una videoteca de temas ecológicos que constituye un importante capital educativo y de difusión.

GRANJA EDUCATIVA

LABORATORIO DE LA TIERRA

A pocos kilómetros de Mar del Plata se encuentra La Piedra, una granja experimental para educación ecológica que completa un ciclo de producción sustentable.

Por Laura Santos, desde Mar del Plata

En la estación Chapadmalal, en la localidad de Batán, a doce kilómetros de esta ciudad, marplatenses y turistas pueden tener el placer de conocer un lugar de singular belleza: la granja educativa La Piedra.

Este establecimiento comenzó a construirse hace algo más de cuatro años, por iniciativa de su propietario, Daniel Colombo, un veterinario que entre los objetivos que se propuso está el de cuidar y mejorar el medio ambiente. La tarea no es fácil. Sin embargo, luego de tanto esfuerzo, el proyecto ya ha comenzado a alcanzar algunos resultados.

El 24 de noviembre, Colombo recibió en su granja al rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ingeniero Jorge Petrillo, y al cuerpo de decanos con quienes firmó un convenio de mutua cooperación. Esto implica que a partir de este momento, los firmantes van a acrecentar su relación y, por su parte, la universidad se comprometió a brindar su apoyo. El ingeniero Petrillo, que manifestó estar ''gratamente sorprendido'' al conocer la granja, explicó que también ''nosotros vamos a nutrirnos de esta experiencia para algunas ideas que tenemos, con relación a los emprendimientos del Programa de Empresas Productivas que estamos diseñando en la universidad''.

Por su parte, Colombo se mostró satisfecho con la firma de este convenio ya que ''este documento da lugar a la firma de dos convenios más que se van a hacer con la Facultad de Ingeniería y de Ciencias Agrarias. El de hoy —afirma Colombo— sintetiza las dos corrientes que confluyen acá: la universidad, que aporta todo el caudal académico, y nosotros, como granja, que brindamos todo lo que es el recurso material para llevar adelante una muestra''.

Del nombre de la granja surge un interrogante, ¿por qué ''educativa''?, a lo que Colombo responde: ''Es educativa para todo. En primer lugar porque va a funcionar con alumnos de escuelas primarias, secundarias y terciarias. En segundo, porque en sí la granja está armada y diseñada para mostrar un fenómeno y comprenderlo''.

Dentro de las muchas actividades que se desarrollan en La Piedra, el objetivo central está basado en el tambo de cabras y ovejas, con una quesería artesanal donde se muestra todo el proceso desde la cría de animales, la alimentación, la extracción de leche y la elaboración y la maduración de quesos.

Como actividades colaterales la granja tiene una huerta orgánica, una planta de tratamiento de líquidos efluentes por medio de filtros biológicos, una huerta de aromáticas, una laguna estanque que actúa como una muestra de lo que es un ecosistema cerrado, y las tres formas de energía no convencionales: eólica, solar y biogás.

Estas tres energías son mostradas para, de alguna manera, interrelacionarlas entre sí y ver cómo la energía es una moneda de intercambio. Esto se da ya que la energía eólica se puede transformar en lumínica, como el gas también en lumínica y en calor. Estos procesos van a poder ser vistos por el público próximamente, ya que se está trabajando, junto con la universidad, en un banco de pruebas, y en la organización de una muestra de los distintos tipos de energías alternativas.

Este emprendimiento está bastante avanzado. La granja cuenta con paneles solares y generador eólico. Sólo resta definir el diseño de la muestra, ya que el fin de la misma es ''mostrar, pero que la gente pueda comprender''. Esta exposición apuntará, además, a demostrar que ésta es una zona apta para la generación eólica, ya que se trata de una región costera donde hay diferencias térmicas entre la costa y el continente, razón por la cual permanentemente hay vientos.

La Piedra posee también una huerta ecológica en la que se utiliza un sistema de siembra programada para que, si por ejemplo hay un ataque de insectos, éstos coman alguna hortaliza que se sembró con más abundancia que otra. De esta forma se protege el cultivo evitando el uso de cualquier tipo de pesticidas.

Hace casi cinco años el propósito de Daniel Colombo era ver concretado su sueño, la construcción de La Piedra. Hoy, en cambio, afirma que ''si a la gente que visita la granja le queda una inquietud, para mí ya es un logro''.

